

Consejo de seguridad analizó situación de Occidente y Urabá

Piden celeridad en investigaciones

Autoridades están a la espera de que la comisión investigadora aclare cuando antes la identidad de los responsables y los móviles de la masacre de ocho personas en las veredas La Rosbalosa y Mulatos.

Que entregue pronto los resultados pidió la Gobernación de Antioquia a la comisión de la Fiscalía y la Procuraduría que investiga la muerte de ocho miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, entre ellos tres niños, hallados la semana pasada en dos fosas comunes en las veredas La Rosbalosa y Mulatos.

De la comisión investigadora se espera que «con resultados contundentes aclare la identidad de los responsables y los móviles de esta masacre», subrayó el secretario de Gobierno de Antioquia Jorge Mejía Martínez, al término de un consejo de seguridad que analizó la situación de orden público en el Occidente y el Urabá antioqueños.

«No podemos dejar pasar los comentarios y aseveraciones muchas veces de mal gusto y malintencionados que han estado proliferando», agregó el funcionario.

En el mismo sentido se pronunció en Bogotá el mi-

nistro de Defensa, Jorge Alberto Uribe Echavarría, quien negó que la masacre haya sido cometida por la Fuerza Pública. «Todo indica que son las Farc, pero tampoco tenemos pruebas a esta hora, vamos a ver que la investigación arroje esa información y esto se hará como todo lo demás, de cara al país, con la verdad, sea ella cual fuere», dijo.

Añadió que las denuncias hechas por personas como la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, que responsabilizan al Ejército, se analizarán con todo el respeto y la atención. «Si son ciertas tengan la seguridad que tendrán sus efectos, si no lo son, también», aseguró.

El coronel Yamilk Moreno, comandante de la Policía Urabá, complementó que «el Estado está muy interesado en aclarar esos hechos para que los responsables sean juzgados y castigados como debe ser». Preciso el oficial que el lugar de los hechos no

En el consejo de seguridad participaron el gobernador Aníbal Gaviria Correa, los comandantes de la IV Brigada, de los Departamentos de Policía de Antioquia y Urabá, entre otras autoridades civiles y militares.

queda en Urabá sino en Tierralta, Córdoba.

El oficial entregó un parte de tranquilidad en la zona, pero reconoció que a raíz de la masacre se han generado algunas alarmas, aunque «ha habido más especulación y zozobra que lo que realmente ha sucedido». Explicó que se han denunciado situaciones que no ocurrieron, como un secuestro entre Apartadó y Turbo y la quema de una finca, que están generando una sensación de inseguridad en la zona.

Reafirman denuncias

Por su parte, la comunidad de paz de San José de Apartadó, a través de la Corporación Jurídica Libertad, ratificó las denuncias de esta semana, en las que responsabilizó al Ejército por la masacre.

El asesor jurídico de la comunidad de paz, Elkin Ramírez, integrante de la corporación, dijo a Caracol Radio que en el área de la matanza reunieron testimonios suficientes sobre la responsabilidad de integrantes de la Brigada XVII en los crímenes.

Denunció el abogado que los militares manipularon las pruebas judiciales durante las diligencias que adelantaron los fiscales instructores luego del hallazgo de los cadáveres.

«El día sábado, mientras estábamos cuidando los cadáveres, cuando arribó el ejército para acordonar la zona para el operativo de seguridad que permitiera el ingreso del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, hubo manipulación de la

evidencia por parte de integrantes del Batallón 33 de contraguerrilla. Eso lo pudimos comprobar, pues un soldado cogió uno de los machetes ensangrentados, que estaba cerca de donde fueron asesinadas las personas, lo llevó hasta el río, lo lavó, lo entregó en la arena y luego delante de toda la comunidad, dijo: este es el machete degollador», declaró Ramírez.

Con respecto a las afirmaciones del ministro de Defensa, el abogado manifestó que no entiende «por qué están asumiendo esa actitud cuando las evidencias, al menos para nosotros y para la comunidad son muy claras: fue el Ejército el que masacró las ocho personas».

Al tiempo, señaló que en la zona lograron evidenciar otros hechos muy delicados, como el secuestro (y amenazas de muerte) de tres familias, en sus casas, a manos de integrantes del Batallón de Contraguerrilla Número 33, adscrito a la Brigada XVII, desde el lunes 21 de febrero hasta que llegó la comisión al lugar.

Habría más desaparecidos

Así mismo, Ramírez ratificó que hay otras familias desaparecidas, de las veredas La Esperanza y Las Nieves, y no se sabe qué pasó con ellas, aunque han «recolectado información según las cual algunos de ellos fueron asesinados por integrantes de la Brigada XVII».

El secretario de Gobierno

departamental, Jorge Mejía Martínez, dijo que no tiene verificación sobre esos otros desaparecidos, que suman 11. «Son comentarios y reportes que hemos recibido por parte de la Defensoría del Pueblo regional de Urabá, en el sentido de que hay familias desplazadas, así como también algunas desaparecidas», precisó.

A su vez, el coronel Yamilk Moreno afirmó que su departamento no ha recibido ninguna denuncia formal sobre una posible fosa en la que

habría al menos otros cinco cuerpos, según dicen en la comunidad.

Aseguró que sus hombres ya estuvieron en esas veredas tratando de verificar esas informaciones y hasta el momento no han encontrado nada. Por ello, instó a que si alguien tiene esa información acuda a la Policía para ir a verificar.

De todas maneras, una comisión de la comunidad de paz salió en la mañana de ayer a buscar a los desaparecidos.

Según Elkin Ramírez, la comunidad dejó de denunciar porque las investigaciones no han conducido a ningún resultado y porque en el pasado de esas denuncias se derivaron nuevas amenazas, desapariciones y asesinatos.

De acuerdo con líderes de la comunidad de paz, durante sus ocho años de existencia los actores armados no la han respetado, han asesinado a más de 150 personas y cometido todo tipo de ataques contra ella.

El director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, junto con otros delegados de la ONU, visitará hoy a la comunidad de paz de San José de Apartadó, para escuchar a las comunidades y autoridades civiles y militares sobre los hechos.

SEGURIDAD

Insisten en comando

En el consejo de seguridad se reiteró la necesidad de instalar un comando de policía en San José de Apartadó, en cumplimiento de la instrucción del Presidente de la República desde el año pasado.

«No debe haber territorios vedados para la Fuerza Pública y para los organismos de seguridad y de control del Estado», reiteró el gobernador Aníbal Gaviria.

El Secretario de Gobierno Departamental complementó que la Gobernación espera que la Alcaldía de Apartadó y la Policía Urabá suministren el sitio para proceder, con el Gobierno Nacional, a la adecuación y construcción del comando. «Nos parece paradójico que la comunidad de paz reclame seguridad por parte del Es-

tado, pero al mismo tiempo la niegue y la obstaculice como ha estado ocurriendo», subrayó.

El coronel Yamilk Moreno, recordó que desde hace por lo menos tres años se ha estado intentando instalar ese comando, pero la comunidad se ha negado rotundamente, y que tiene listos 50 agentes y toda la logística para instalarlos.

«Es difícil dar seguridad en forma virtual. Hemos tratado de dialogar, llevo un sinnúmero de solicitudes informándole a esa comunidad que la Policía está presta a brindarles la seguridad presencial, no perimetral como lo han requerido siempre ellos (...). Estamos en espera de que nos den el sitio», reiteró el oficial.

OCCIDENTE

Más Fuerza Pública

En el consejo de seguridad, los mandatarios del Occidente antioqueño reiteraron la solicitud de aumentar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Fe de Antioquia, Uramita, Dabeiba y Mutatá, «la cual se ha brindado por parte de la comandancia de la Cuarta Brigada y de la Policía Antioquia», aseguró Jorge Mejía Martínez.

«Concretamente en la zona de Las Azules, Tonusco y Guasabrá se va a reforzar la presencia militar, por cuanto consideramos que es un corredor estratégico que no se puede descuidar», agregó.

En esos corregimientos, los grupos al margen de la ley dificultan el ingreso y la salida de los pobladores, e incluso el ingreso de alimentos, generando un ambiente de zozobra que ha provocado algunos desplazamientos, informó la alcaldesa Angela

Janceth Rivera.

Por su parte, el alcalde de Peque, Luis Alberto Valle, informó que su municipio está conernado por hechos que se han venido presentando con minas antipersonales. «Hace ocho días nada más uno de los empleados iba a hacer un trabajo en una escuela rural, se paró en una mina de estas y perdió el pie derecho», dijo.

Añadió que en el corregimiento El Agrio el fin de semana perdió la vida una niña de escasos cuatro años y resultó herida otra de dos, en enfrentamientos entre las AUC y milicias de la guerrilla.

Por ello, a partir de esta semana se realizarán en Peque unas jornadas por la paz y por la vida, «para mostrarle al mundo que no estamos conformes con la situación que estamos viviendo», dijo el mandatario local.